

# EduFrontera: Facilitación de procesos colaborativos de educación no formal en el desarrollo local sostenible con organizaciones rurales en poblados transfronterizos del distrito Santa Cecilia, La Cruz, Costa Rica

EDUFRONTERA: *Facilitation of collaborative processes of non-formal education in sustainable local development with rural organizations in cross-border villages of the Santa Cecilia district, La Cruz, Costa Rica*

Pável Bautista Solís



Juan Carlos Ramírez Brenes



Luis Diego Segura Ramírez



Sandra Lezcano Calderón



---

## Cómo citar

Pável Bautista Solís, P.; Ramírez Brenes, J. C.; Segura Ramírez, L. D.; y Lezcano Calderón, S. (2025). EduFrontera: Facilitación de procesos colaborativos de educación no formal en el desarrollo local sostenible con organizaciones rurales en poblados transfronterizos del distrito Santa Cecilia, La Cruz, Costa Rica. *Revista Digital Costa Oriental, Número Especial*, pp. 81-108.

---

## RESUMEN

El desarrollo local sostenible es una meta pendiente en gran parte de las zonas rurales de América Latina. En particular, las zonas rurales fronterizas presentan una serie de retos biofísicos, sociopolíticos e institucionales que dificultan el bienestar de la población local. En Costa Rica, el desarrollo rural es responsabilidad del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), que facilita un esquema de gobernanza territorial para apoyar las potencialidades del territorio rural. Sin embargo, dicho esquema es complejo y parece profundizar las asimetrías en el capital humano, lo que obstaculiza el desarrollo. El objetivo de este trabajo es analizar el caso de organizaciones rurales en el distrito de Santa Cecilia, Guanacaste, Costa Rica, en su incorporación a los esfuerzos institucionales de desarrollo del Estado costarricense. Los resultados muestran que las capacidades organizacionales deben ser fortalecidas para poder participar en el esquema de desarrollo rural oficial de Costa Rica.

**Palabras clave:** *Desarrollo local sostenible; Zonas rurales transfronterizas; Gobernanza territorial.*

## ABSTRACT

*Sustainable local development is a pending goal in much of the rural areas of Latin America. In particular, border rural areas have a series of biophysical, socio-political, and institutional challenges that hinder the well-being of the local population. In Costa Rica, rural development is the responsibility of the Rural Development Institute (INDER), which facilitates a territorial governance scheme to support the potentialities of the rural territory. However, this scheme is complex and seems to deepen asymmetries in human capital, which hinders development. The objective of this work is to analyze how rural organizations in the district of Santa Cecilia, Guanacaste, Costa Rica, are incorporated into the institutional development efforts of the Costa Rican State. The findings indicate that strengthening organizational capacities is necessary to engage in Costa Rica's official rural development scheme.*

**Keywords:** *Sustainable local development; Cross -border rural areas; Territorial governance.*

## Introducción

El desarrollo local sostenible es un reto mayor en zonas rurales de los países en desarrollo. Especialmente en las zonas transfronterizas de América Central, varios factores socioecológicos limitan el bienestar de las poblaciones rurales (Bautista et al., 2023). Estos territorios presentan los más bajos estándares de desarrollo rural a escala nacional, viven una alta movilidad relacionada con los flujos migratorios, reciben poca inversión en infraestructura pública y productiva, y tienen limitado acceso a servicios de calidad (Bautista et al., 2023). Además, existen pocas oportunidades de movilidad social, las actividades productivas que desarrollan los habitantes por lo regular son del sector primario y altamente vulnerables a los embates de los fenómenos hidrometeorológicos extremos (Chen et al., 2017). Asimismo, en estas áreas se ha incrementado la presencia de actividades del crimen organizado como tráfico de personas, contrabando e inclusive narcotráfico que incrementan la inseguridad de la población (Kron, 2010).

Otro reto para lograr el desarrollo local sostenible es la inequidad en el desarrollo rural de zonas transfronterizas. Especialmente en el contexto de la gobernanza del desarrollo rural sostenible en Costa Rica, que establece la oportunidad para las organizaciones rurales de gestionar proyectos no reembolsables ante el Instituto de Desarrollo Rural (Inder, Bautista et al., 2019). Sin embargo, el rezago en capital humano de las comunidades rurales, especialmente las fronteras, es tal que la gestión requiere ser apoyada para cumplir los requerimientos técnicos, administrativos y organizacionales. La desatención de esta situación genera inequidad, ya que solamente las organizaciones con mayores recursos y capacidades pueden optar por oportunidades para apoyar su desarrollo. A mayor escala, esto se refleja en el presupuesto asignado a proyectos en los territorios rurales de Costa Rica. La Contraloría General de la República de Costa Rica señaló que el territorio Liberia-La Cruz, donde se ubica el distrito de Santa Cecilia, fue el número 20/34 en presupuesto asignado a proyectos en 2021 y 2022, con solamente 22.14 millones de colones (CGR, 2023).

Las teorías sociológicas para explicar el desarrollo en zonas fronterizas son diversas. Sin embargo, en esta pieza se utilizarán la teoría de fronteras de Gloria Anzaldúa y el marco de referencia de capitales de la comunidad de Cornelia Flora. Para Anzaldúa, las fronteras son



Por otro lado, congruente con el abordaje de Anzaldúa, las dinámicas del territorio transfronterizo Costa Rica – Nicaragua generan un mestizaje particular en la población de Santa Cecilia y sus comunidades que es contrario incluso a la identidad hegemónica costarricense (Barboza, 2024). La población local está muy relacionada con Nicaragua, tiene lazos de parentesco, comerciales y culturales con este país. En plena pandemia de COVID-19, algunos habitantes de Santa Cecilia preferían atenderse en los centros médicos de Managua, la capital nicaragüense, que en San José, la capital de Costa Rica. Las razones son geográficas y económicas, ya que se tienen que recorrer 90 km menos a Managua (204 km) que a San José (290 km). Además, los servicios privados de salud, la comida y el alojamiento son más baratos en Managua. Consecuentemente, los lazos transfronterizos se preservan y evolucionan, permitiendo el desarrollo de una identidad común transfronteriza. Sin embargo, pocos estudios y planes estratégicos del desarrollo toman en cuenta esta identidad transfronteriza para planear y organizar el desarrollo rural sostenible.

Por otro lado, el marco de referencia de capitales de la comunidad establece que existen siete categorías de recursos en las comunidades rurales, interactuando con factores externos, de los cuales la población transfronteriza puede servirse para constituir sus medios de vida y construir su desarrollo (Gutiérrez-Montes et al., 2009; Gutiérrez-Montes y Bartol Hermida, 2017). Los análisis del desarrollo de comunidades rurales e incluso naciones utilizando este marco muestran que hay trayectorias positivas que pueden potenciar el desarrollo y trayectorias nocivas que lo obstaculizan. Además, no hay una única receta para el desarrollo, sino más bien la creatividad y el ingenio, así como los factores externos que influyen en las comunidades deben ser considerados para potenciar los recursos locales y facilitar el desarrollo. Particularmente, se han analizado el valor de dos capitales o recursos principales: el capital humano, que se refiere a los estudios formales o la capacidad de desarrollar oficios o tareas técnicas, o acceder externamente al conocimiento; y el capital social, que son las relaciones y normas de reciprocidad entre personas y organizaciones de las comunidades que les permiten movilizar esfuerzos para el desarrollo (Bautista, 2012).

## Aspectos teórico-conceptuales

### *Indicadores de bienestar y desarrollo*

En Costa Rica, el cantón de La Cruz y el distrito de Santa Cecilia presentan uno de los indicadores de desarrollo más críticos del país. Por ejemplo, en 2020 La Cruz tenía el quinto índice de pobreza multidimensional más alto del país, con un valor de 0.143 (PNUD y EES, 2020). A continuación, se presentan los principales índices de desarrollo en la escala más desagregada disponible. El índice de desarrollo humano cantonal (IDHC) del PNUD fue calculado con datos de 2018. Las dimensiones consideradas en el IDHC incluyen vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. El IDHC se situaba en 0,73 (PNUD y EES, 2020), considerado como alto, principalmente por la elevada esperanza de vida. Sin embargo, la escala cantonal dificulta la observación de limitaciones en el distrito de Santa Cecilia. En este distrito, son evidentes las limitaciones en el IDH relacionadas con los años promedio de escolaridad y el índice de bienestar material.

El índice de progreso social (IPS) es calculado por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) a escala cantonal. El IPS considera indicadores sobre necesidades básicas humanas, fundamentos de bienestar, oportunidades y desempeño económico (García, 2019). En 2019, el IPS en La Cruz era medio alto (67,84), pero este cantón se ubicaba en la posición 68 de 82 cantones de Costa Rica. El cantón de La Cruz tiene fortalezas en nutrición y cuidados médicos o salud y bienestar; sin embargo, presenta limitaciones en vivienda, acceso a conocimientos básicos, libertad personal o de elección, y acceso a educación superior.

El índice de desarrollo social (IDS) en Costa Rica es calculado por MIDEPLAN (2018). El IDS considera cinco dimensiones: económica, participación electoral, salud, educación y seguridad. El distrito de Santa Cecilia se ubicaba en 2017 en el quintil I. En Santa Cecilia, el principal reto es la dimensión económica, debido a la limitada inserción laboral y la dependencia de actividades agropecuarias, apenas de subsistencia (MIDEPLAN, 2018). Adicionalmente, la segunda dimensión más limitada en Santa Cecilia es la participación

electoral (MIDEPLAN, 2018). Lamentablemente, la baja participación electoral continúa, ya que en la elección municipal de 2020 el abstencionismo fue de 54,9% (TSE, 2020) y en la elección presidencial de 2022, de 59% en este distrito (TSE, 2022).

### ***Gestión del riesgo en poblaciones rurales transfronterizas***

La gestión del riesgo es esencial para facilitar el desarrollo de las comunidades rurales. Históricamente, los aspectos biofísicos y la falta de planeación del desarrollo urbano se combinaron para generar impactos severos en la sociedad, denominados desastres naturales. Actualmente, una mejor comprensión de las dinámicas socioecológicas del territorio y un marco teórico de referencia actualizado permiten entender que los desastres son consecuencia de la omisión humana.

Centroamérica cuenta con políticas para gestionar el riesgo y la atención de emergencias. El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) es el ente encargado de las políticas públicas y mecanismos institucionales regionales. La Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres establece los lineamientos para un abordaje integral, partiendo desde la interrelación con la gestión económica, la cohesión social y la gestión ambiental (CEPREDENAC, 2011). Además, se toman en cuenta amenazas relacionadas con el cambio global, como el cambio climático (CEPREDENAC, 2011), que está incrementando la vulnerabilidad a eventos extremos del clima (IPCC, 2021).

Costa Rica ha renovado el marco legal de la gestión del riesgo. Alineada con la política regional, actualmente rige la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo No. 8488 (Asamblea Legislativa, 2005), con sus reformas y reglamentos correspondientes (Poder Ejecutivo, 2018 y 2020). Además, está vigente el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2021-2025 (CNE, 2021). Lamentablemente, esto no siempre trasciende hasta la escala local y, por lo tanto, no se contextualiza el riesgo con factores locales. Por ejemplo, en Santa Cecilia es evidente que la principal amenaza es la inseguridad.

Aunque la legislación citada prioriza la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, la implementación en zonas rurales sigue siendo limitada. En los poblados transfronterizos del cantón de La Cruz, Guanacaste, las condiciones de aislamiento y la falta de infraestructura de telecomunicaciones y transporte generan condiciones propicias para el incumplimiento de la legislación vigente. Estos factores, sumados a una alta exposición a amenazas naturales, producen un marco de vulnerabilidad importante que obstaculiza el desarrollo. En conclusión, la población local cuenta con un apoyo institucional limitado para la gestión del riesgo en ambos lados de la frontera, lo que genera fuertes impactos que restringen el desarrollo sostenible.

### ***Diálogo social para el desarrollo rural sostenible***

El diálogo social ha sido definido por la OIT como “todos los tipos de negociación y consultas, y también el intercambio de información entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en asuntos de interés común relacionados con la política social y económica” (OIT, 2020, p. 3).

Si bien desde la definición de la OIT el diálogo social tiene un fuerte componente en el ámbito de las relaciones laborales, en el contexto del desarrollo rural este concepto se vincula con la resolución de conflictos sociales, especialmente aquellos que se presentan a escala local. Los poblados transfronterizos presentan características críticas que influyen en su vulnerabilidad social, económica y ambiental. Por ejemplo, han experimentado una inversión social históricamente sesgada por parte del Estado costarricense, cuentan con un capital financiero limitado para el desarrollo de actividades productivas de valor agregado y enfrentan opciones restringidas de estudio y superación profesional (ver sección anterior). Además, se encuentran en una macrorregión caracterizada por la frontera con Nicaragua, lo cual expone a estas comunidades a los vaivenes políticos entre Managua y San José. Asimismo, al ser zona fronteriza, también presentan una dinámica social compleja producto de la inmigración, la inseguridad y, más recientemente, la penetración de grupos organizados vinculados con actividades delictivas como el narcotráfico, el lavado de dinero, entre otras dinámicas fronterizas. Esta realidad compleja demanda que las organizaciones locales y, más específicamente, las personas líderes, tengan la capacidad de gestionar los conflictos que se producen en sus comunidades y de visualizar oportunidades para construir relaciones positivas que propicien alternativas de desarrollo.

Desde esta perspectiva, el desarrollo sostenible, siguiendo los ODS, requiere un papel relevante por parte de las organizaciones locales y de la sociedad civil. Autores como Susan Baker (2016) han destacado la importancia de la participación de los actores no estatales y del sector privado para impulsar acciones de desarrollo sostenible. Precisamente, la Ley Inder 9036 planteó en Costa Rica la posibilidad legal de involucrar a las comunidades rurales en la priorización de proyectos estratégicos para facilitar el desarrollo rural.

No obstante, las visiones de desarrollo predominantes tienden a la exclusión, la inequidad y al desbalance con el ambiente, generando externalidades negativas como el cambio climático y el deterioro de los recursos naturales. Por ende, fomentar el desarrollo sostenible implica desafiar esas visiones y a sus actores, lo cual conlleva un alto potencial de conflicto. Para ello, se requieren liderazgos capaces de promover diálogos sociales que permitan convertir el conflicto en oportunidades para el desarrollo rural sostenible, en sus dimensiones social, ambiental y económica.

### ***Educación rural no formal***

La educación no formal, entendida como la opción pedagógica desarrollada al margen del sistema educativo escolarizado, ha sido una estrategia útil para facilitar la masificación de la educación entre personas en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, en América Latina se ha implementado reiteradamente para promover la alfabetización de la población adulta. Actualmente, la educación no formal sigue siendo una alternativa para la población rural que no pudo cursar la educación básica y que, ante los marcos actuales del desarrollo territorial rural, asume la responsabilidad de apoyar la gestión del desarrollo rural sostenible. Es decir, la educación no formal pretende fortalecer el desempeño ocupacional (Luján Ferrer, 2010).

La educación no formal implica una planeación sistemática que abarca el diseño, la organización, la ejecución y la evaluación de un proceso de enseñanza-aprendizaje (Luján Ferrer, 2010). Otra particularidad es que siempre se ha orientado a facilitar el aprendizaje de personas con características específicas: mujeres jefas de hogar, adultos rurales, jóvenes rurales, personas en situación de calle, entre otras (Luján Ferrer, 2010). Por lo tanto, es posible contextualizar de mejor manera los alcances y métodos del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como adecuarlos a un horizonte temporal más pragmático, de acuerdo con



las características de la población objetivo. Esto ha facilitado su implementación en Costa Rica, donde se pueden observar ejemplos de procesos consolidados como museos y centros culturales, programas de educación cooperativista y sindical, el movimiento scout, institutos de idiomas y centros de capacitación laboral y formación profesional (Luján Ferrer, 2010). Finalmente, en Costa Rica la educación no formal es citada como una estrategia de extensión universitaria (Luján Ferrer, 2010; Quesada Chávez, 2019); sin embargo, también puede considerarse un sinónimo de extensión universitaria, dependiendo de los alcances y la estructura del proceso.

### ***Gestión de proyectos financiables de organizaciones rurales***

La gobernanza del desarrollo rural en Costa Rica deposita en el Inder la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de articulación. Para ello, se han conformado 29 territorios rurales en todo el país, de los cuales cuatro se encuentran en la provincia de Guanacaste: 1) Liberia-La Cruz, 2) ACBT<sup>1</sup>, 3) Santa Cruz-Carrillo y 4) NaHoNi<sup>2</sup>. Además, el Inder facilita el proceso de selección de proyectos rurales financiables en la región Chorotega (Bautista et al., 2019). Los mecanismos de financiamiento incluyen los llamados proyectos de fomento productivo, que son inversiones destinadas a apoyar el desarrollo de iniciativas productivas de menor cuantía para individuos u organizaciones rurales. Asimismo, existen proyectos sociales que contribuyen al desarrollo de obras de interés social orientadas a mejorar la infraestructura de los poblados rurales. El Inder también dispone de crédito rural a tasas preferenciales (tasa de interés fija del 8% durante todo el plazo) para individuos y organizaciones que requieran capital semilla para impulsar proyectos productivos. Finalmente, existe la posibilidad de financiar proyectos territoriales mediante capital no reembolsable a asociaciones rurales productivas que presenten propuestas con una escala de impacto considerada territorial. Aunque no existe una jerarquización explícita para la asignación del financiamiento, las organizaciones que demuestran capacidad técnica, organizacional, administrativa y operativa suelen gestionar toda la gama de financiamiento disponible en el Inder.

---

<sup>1</sup> Abangares, Bagaces, Cañas y Tilarán.

<sup>2</sup> Nandayure, Hojanca y Nicoya.

Los proyectos territoriales deben ser priorizados por los Consejos de Desarrollo Territorial Rural y los órganos de gobernanza del sector competente, como el Consejo Regional del Sector Agropecuario de la Región Chorotega (Bautista et al., 2019). Además, estos proyectos deben cumplir con un formato técnico y extenso, cuya gestión recae en las organizaciones interesadas en el financiamiento. Ante esta situación, representantes de organizaciones comunales recurren a instituciones públicas y universidades en busca de apoyo para elaborar propuestas de proyectos financiables (Bautista et al., 2019).

Además del Inder, la Banca para el Desarrollo —a través de bancos públicos— y la asistencia técnica de profesionales agropecuarios capacitados por el IICA, ofrecen oportunidades adicionales de crédito agropecuario a tasas preferenciales (Bautista et al., 2019). El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo [Infocoop], también brinda acompañamiento técnico y financiamiento para la formación de empresas cooperativas. Asimismo, existen alternativas de financiamiento en entidades como embajadas de gobiernos extranjeros y otras ONG (por ejemplo: Costa Rica por Siempre).

En relación con los aspectos transfronterizos, cabe destacar que, desde la consolidación del concepto de Estado-nación tras la Paz de Westfalia, se inició un proceso de definición de fronteras nacionales, observadas y delimitadas desde una perspectiva geográfica. Esto ha dado lugar en ocasiones a una confusión entre los conceptos de frontera y de límite territorial, siendo este último una alusión más a la separación que a la integración. Según Amilhat (2013, citado por Tapia Ladino, 2017), la concepción de Estado estuvo influenciada por una lógica territorial según la cual la autoridad y la soberanía derivaban de la constitución de un Estado dotado de límites lineales.

Sin embargo, durante el siglo XX y las primeras dos décadas del XXI, el concepto de frontera ha experimentado importantes cambios. Inicialmente, el enfoque teórico estaba limitado a ciertas disciplinas como la geografía, las ciencias políticas y otras ciencias sociales (análisis disciplinario), pero actualmente se aborda de manera multidisciplinaria, lo que ha aportado mayor rigor científico al estudio de los espacios y fenómenos fronterizos. Se ha pasado de concebir la frontera como una línea divisoria de separación (enfoque tradicional), a interpretarla como un espacio de construcción social y de múltiples vinculaciones, donde lo transfronterizo puede analizarse con un enfoque territorial estratégico y transversal. En este

contexto, la unidad de análisis e intervención, desde dicho enfoque, son las relaciones entre actores individuales y colectivos, ya que estas configuran y reconfiguran los territorios y su base material: la corteza terrestre (Morales y Morales, 2018). En el caso de la frontera Costa Rica-Nicaragua, un concepto fundamental para la comprensión de la realidad transfronteriza es la subjetividad y su influencia en la identidad de los habitantes fronterizos, la visión del territorio y la realidad local, incluyendo la perspectiva de género (Sánchez, 2018).

En el contexto descrito, el objetivo del presente trabajo es analizar las capacidades organizativas de organizaciones e individuos interesados en la gestión de proyectos sociales para el desarrollo rural, bajo el marco de gobernanza vigente en Costa Rica, específicamente en el distrito de Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste. El estudio busca evidenciar las brechas existentes en los capitales comunitarios requeridos para participar eficazmente en los procesos estatales de desarrollo transfronterizo.

## **Materiales y métodos**

### ***Área de estudio y población meta***

El área de estudio se ubica en el norte de la provincia de Guanacaste, Costa Rica. El distrito de Santa Cecilia constituye el distrito número dos del cantón de La Cruz. Limita al norte con el municipio de Cárdenas (Nicaragua), al oeste con el cantón de Upala, y al este y sur con el primer distrito del cantón de La Cruz, conocido también como La Cruz. En 2016, según datos de la Municipalidad de La Cruz, Santa Cecilia se sitúa a 337 msnm y posee una extensión de 257.68 km<sup>2</sup>, lo que representa el 18.62% del territorio cantonal. Además, cuenta con una población aproximada de 6,258 personas, lo que equivale a una densidad de 24.3 habitantes por kilómetro cuadrado (Municipalidad de La Cruz, 2016).

En cuanto a su estructura organizativa y administrativa, Santa Cecilia se caracteriza por contar exclusivamente con localidades de carácter rural. Los poblados que conforman el distrito son: Santa Elena, San Vicente, La Virgen, San Antonio, Los Corrales Negros, Santa Cecilia Centro (La Lajosa, Los Ángeles, La Esperanza), Argendora, Los Palmares (Las Delicias), Bella Vista,

Armenia, El Caoba (Las Brisas), Piedras Azules, Belice, San Rafael y Las Marías (Municipalidad de La Cruz, 2016).

Respecto a los aspectos económicos, las comunidades del distrito tienen como principal actividad la producción agropecuaria; predominan los bienes agrícolas y pecuarios a pequeña escala, destinados al autoconsumo y en parte al comercio local. Asimismo, existe producción agrícola industrial, especialmente de cítricos, desarrollada por empresas como Del Oro y algunos productores independientes.

Los datos demográficos indican que Santa Cecilia contaba con 7,485 habitantes en 2011, y proyecciones para 2022 estiman una población de 9,191 habitantes (INEC, s.f.). La población objeto de estudio son las organizaciones rurales del distrito, para las cuales no existe un censo o registro actualizado. Por ello, se recurrió a canales de comunicación locales a través de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cecilia, la Municipalidad de La Cruz y funcionarios del Inder para convocar a las organizaciones interesadas en gestionar capital financiero de dicha institución. El primer taller informativo se realizó en Santa Cecilia el 17 de octubre de 2023, con la participación de 45 personas de 14 organizaciones. En ese taller se invitó a los interesados a un diagnóstico rápido que se llevó a cabo en un segundo taller el 29 de noviembre de 2023, con la asistencia de 35 personas de 10 organizaciones. Por lo tanto, el muestreo utilizado es no paramétrico, por conveniencia.

### **Proceso metodológico**

El presente trabajo inició con una revisión de la literatura acerca de la evolución del desarrollo a escala internacional, con el fin de facilitar la comprensión de los referentes teóricos y metodológicos que explican la evolución de la gobernanza del desarrollo territorial rural. Adicionalmente, se realizaron talleres de discusión para identificar ejes estratégicos de fortalecimiento hacia la sostenibilidad y la resiliencia de los proyectos productivos rurales a gestionar. Estas actividades se llevaron a cabo mediante un análisis del entorno del distrito de Santa Cecilia, La Cruz, Guanacaste; una reflexión sobre experiencias previas en proyectos de

desarrollo en la región; y conversaciones relacionadas con la gestión de proyectos con el Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica (Inder).

Se priorizaron cuatro ejes principales: 1) diálogo social y resolución de conflictos; 2) gestión de proyectos financiados; 3) gestión del riesgo y adaptación al cambio climático; y 4) gestión de capacidades organizacionales comunitarias. Estos ejes fueron seleccionados considerando los retos señalados por Inder en las organizaciones que buscan financiamiento. No obstante, en esta obra se presentan resultados parciales correspondientes a la facilitación inicial de los ejes uno y tres.

Adicionalmente, se construyó de manera colaborativa una propuesta de educación no formal, denominada EduFrontera, basada en el modelo de adquisición de capacidades fundamentado en la experiencia (Ramírez y Bautista, 2022). La educación no formal requiere y promueve un fortalecimiento colaborativo de capacidades, donde la participación tanto estudiantil como institucional es fundamental. El proceso de educación no formal debe ser eficaz, participativo, dinámico y práctico. Su fundamento metodológico se basa en la investigación-acción, dado que considera las capacidades, habilidades y necesidades de los participantes para la conformación de la currícula de aprendizaje.

### ***Diagnóstico de capacidades organizacionales***

Las capacidades organizacionales de entrada fueron investigadas mediante un cuestionario electrónico compuesto por nueve secciones y un total de 50 preguntas. La mayoría de las preguntas eran cerradas y de selección única, lo que facilitó la obtención de respuestas claras y precisas. La facilitación del diagnóstico fue realizada por un equipo integrado por cuatro profesores y cuatro asistentes académicos, quienes se dividieron entre las organizaciones participantes para explicar las preguntas y facilitar su comprensión. De las diez organizaciones involucradas, únicamente ocho completaron el instrumento de diagnóstico. Los resultados obtenidos fueron analizados mediante estadística descriptiva y, adicionalmente, se realizó un análisis comparativo con los requisitos de financiamiento establecidos por el Inder.

**Figura 2.**  
**Taller del diagnóstico de organizaciones rurales del distrito Santa Cecilia, La Cruz, Costa Rica**



Foto: Ariadna López Vargas, 2023.

### ***Diseño colaborativo un proceso de aprendizaje no formal***

Esta fase se inició con reuniones para planear colaborativamente las actividades anuales junto con Inder, la Escuela de Relaciones Internacionales y el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco (Cemedé). Además, se gestionaron espacios en el territorio Liberia - La Cruz y en el Consejo Municipal para presentar EduFrontera y buscar aliados estratégicos, a partir de los cuales se incorporó al proceso la Municipalidad de La Cruz. Posteriormente, se realizó una gira de reconocimiento y presentación ante las organizaciones rurales beneficiarias, durante la cual se desarrolló un diagnóstico participativo rápido para verificar las necesidades y capacidades de los socios locales (Geilfus, 2002).

Seguidamente, se diseñó de forma colaborativa el proceso de educación no formal, siguiendo guías especializadas (Castillo Corporán, 2011; Luján Ferrer, 2010; Velásquez Uribe et al., 2016). Este proceso requirió un diseño curricular basado en capacidades, que considera: 1) consulta y análisis de los referentes curriculares; 2) formulación de perfiles de egresados; 3) organización de planes de estudio; 4) elaboración de programas para la administración curricular de los módulos de aprendizaje; y 5) elaboración del material de apoyo. La evaluación inicial se efectuó a partir de un taller participativo con los socios locales, cuyos resultados serán analizados mediante estadística descriptiva y análisis cualitativo.

Asimismo, se gestionó un acuerdo con cada una de las organizaciones rurales fronterizas involucradas en el proceso EduFrontera, detallando los derechos y obligaciones de las partes involucradas. A continuación, se inició la implementación del proceso de educación no formal, que comprende un periodo de 24 meses, durante el cual se están realizando talleres temáticos, ejercicios prácticos y actividades participativas sobre la gestión de proyectos financiados. El proceso incluye, además, técnicas de monitoreo y evaluación formativa, que permiten una retroalimentación continua para la adaptación y mejora según las necesidades detectadas. Adicionalmente, se contemplan cinco meses para desarrollar talleres de reforzamiento de aprendizajes, incluyendo estudios de prefactibilidad para los proyectos financiados (Fernández Espinosa, 2021).

## **Resultados**

### ***Evolución contemporánea del desarrollo rural***

El desarrollo ha estado en la agenda internacional desde hace más de 70 años (1949-2022, Esteve, 1997). Siete décadas de práctica en torno al desarrollo han permitido construir discursos, metodologías, enfoques, marcos y teorías, pero la meta del desarrollo rural sostenible sigue siendo un reto. Lamentablemente, la experiencia acumulada no suele considerarse como marco de referencia para nuevas intervenciones, lo que genera incertidumbres respecto a los alcances que las iniciativas puedan tener (Bergeron et al., 2017). A continuación, se presenta una breve síntesis de la historia del desarrollo rural sostenible.

Esta síntesis se realiza a partir de una generalización y no pretende ser un recuento exhaustivo de la historia del desarrollo rural sostenible. Ellis y Biggs (2001) estructuraron una cronología sobre el discurso del desarrollo desde la década de 1950 hasta los 2000. Según estos autores, los principales cambios en el discurso del desarrollo rural se relacionan con la visión acerca de las personas agricultoras y su rol en la economía nacional, así como con el grado y la calidad del protagonismo de la población local para facilitar el desarrollo. Por ejemplo, en la década de 1950 las familias de pequeños agricultores eran consideradas prescindibles para la economía nacional; sin embargo, en las décadas de 1970 y 1980 se reconocieron como un elemento indispensable para el desarrollo rural. Asimismo, Ellis y Biggs (2001) describen que el protagonismo de la población local en el desarrollo rural sostenible se ha consolidado actualmente, conformando sistemas de gobernanza como el vigente en Costa Rica. Finalmente, un hito importante surgido en los años 1980 fue la focalización en la pobreza (Ellis y Biggs, 2001).

Otra tendencia significativa ha sido la expansión y enriquecimiento del enfoque del desarrollo rural para incorporar los diversos recursos, medios de vida y objetivos que convergen en un territorio (Hodge y Midmore, 2008). En este sentido, se ha transitado de un enfoque sectorial—en el que todas las políticas y regulaciones se aplicaban uniformemente a nivel nacional—hacia la posibilidad de elaborar políticas contextualizadas según características territoriales y locales. En Costa Rica, esto se evidencia en el marco actual de gobernanza del desarrollo rural territorial, que contempla una estructura para desarrollar política pública a distintas escalas, incluida la local. Relacionado con ello, Hodge y Midmore (2008) subrayan el cambio hacia el reconocimiento y apoyo a una economía rural diversificada. Por ejemplo, en el cantón La Cruz la actividad agropecuaria en las zonas costeras pierde relevancia ante la consolidación del turismo, el desarrollo inmobiliario y la pesca (Morataya-Montenegro y Bautista-Solís, 2020). En síntesis, la orientación de la política de desarrollo ha evolucionado de lo agropecuario a lo rural (Hodge y Midmore, 2008).

Por otro lado, es importante considerar las innovaciones en torno al desarrollo rural en el período 2000-2020. En este período, las teorías y enfoques de gobernanza del desarrollo rural sostenible se han consolidado en normativas nacionales (Ellis y Biggs, 2001). Además, se han incorporado al discurso conceptos relevantes como ambiente, globalización, mercado,



políticas, servicios ecosistémicos, seguridad alimentaria, cambio climático e innovación (Lu y de Vries, 2021). A escala global, diversos organismos han propuesto desde 2000 una agenda con metas específicas en desarrollo rural, partiendo de la Estrategia Europea 2020 y retomándose luego en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Adamowicz, 2020). Asimismo, el desarrollo rural ha evolucionado desde una perspectiva agropecuaria hacia un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario, donde cada vez más disciplinas aportan teorías, metodologías y enfoques innovadores para facilitar el desarrollo rural sostenible, sin que exista una disciplina predominante (Lu y de Vries, 2021). Estos autores señalan, además, un reto clave: la fuerte influencia en el discurso del desarrollo rural por parte de organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE, así como de autores provenientes principalmente del norte global —Estados Unidos y Europa—. En este sentido, es fundamental considerar la experiencia desarrollada en América Latina, que puede estar mejor contextualizada a la realidad regional (Alonzo et al., 2011; Balanzo et al., 2020; Janvry y Sadoulet, 2003; Kay, 2001; Samper y Torrens, 2015).

### ***Retos de las organizaciones rurales***

Los resultados del diagnóstico inicial evidencian una gran diversidad entre las organizaciones participantes en el proceso de educación no formal. Algunas cuentan con experiencia sólida y una estructura jurídica y administrativa consolidada, mientras que otras están en etapas incipientes de formalización o representan grupos que apenas comienzan a organizarse. Esta heterogeneidad se refleja también en las ideas de proyectos productivos identificados: aunque todos se orientan a la producción alimentaria, especialmente agrícola, las organizaciones con menor experiencia requieren un mayor acompañamiento para consolidar y enfocar adecuadamente sus propuestas.

Estos hallazgos subrayan la necesidad de un proceso de fortalecimiento diferenciado que reconozca y atienda las desigualdades entre las organizaciones, evitando que el apoyo se concentre exclusivamente en las más preparadas y asegurando que todas tengan la oportunidad de desarrollar capacidades a su propio ritmo y contexto.

Solamente dos de las ocho organizaciones que participaron en el diagnóstico habían solicitado previamente financiamiento al Inder en 2023. En ambos casos, la solicitud fue rechazada por incumplimiento de los requisitos establecidos. En primer lugar, entre los aspectos legales, el Inder exige que las organizaciones que desean acceder a financiamiento estén legalmente constituidas y tengan carácter de organización sin fines de lucro. En este sentido, la mayoría de las organizaciones que participaron en los talleres iniciales (nueve de diez) cumple con este requisito, aunque una no cuenta con la cédula jurídica correspondiente. Todas las organizaciones formalizadas poseen la figura de asociación, respaldada por la Ley de Asociaciones de Costa Rica número 218.

No obstante, la mayoría de las organizaciones diagnosticadas no cuenta con los libros contables requeridos al día, como libro diario, libro mayor, inventarios y balances. De forma similar, solo cuatro organizaciones disponen de una cuenta bancaria activa a nombre propio y manejan estados financieros actualizados.

En cuanto a la organización interna, únicamente dos de las organizaciones con mayor experiencia y capacidades contaban con pólizas de trabajo para sus empleados, afiliación al seguro de la Caja Costarricense del Seguro Social, personal debidamente registrado y salarios mensuales. Cabe destacar que estas dos organizaciones también declararon tener deudas; sin embargo, esto no constituye un factor excluyente siempre que se cumplan los compromisos adquiridos. Por otra parte, seis de las ocho organizaciones diagnosticadas realizan un seguimiento al plan de trabajo al menos de forma semestral.

La experiencia en la gestión de recursos financieros de las organizaciones resultó limitada. Por ejemplo, cuatro organizaciones nunca habían manejado fondos públicos para proyectos colectivos. Afortunadamente, la percepción de estas organizaciones respecto a la gestión realizada con dichos fondos es favorable. Asimismo, solo tres organizaciones han gestionado fondos privados, y evaluaron positivamente esta experiencia. En conjunto, estos resultados evidencian que alrededor de la mitad de las organizaciones diagnosticadas carecen de experiencia en la administración de recursos financieros.

Las capacidades de gestión del conocimiento de las organizaciones diagnosticadas son limitadas. Solo una organización ha recibido capacitación en tecnologías de la información y

la comunicación. Asimismo, ninguna organización ha sido capacitada en habilidades blandas, las cuales son fundamentales para el proceso participativo de gestión, incluyendo la presentación de propuestas de proyectos, la administración de su financiamiento y la solicitud de aval en espacios de gobernanza e instituciones. Además, únicamente dos organizaciones han recibido formación en gestión de proyectos, y una sola ha sido capacitada en gestión de conflictos y diálogo social.

En cuanto a la exposición a amenazas naturales y al cambio climático, las ocho organizaciones reportaron verse afectadas principalmente por lluvias torrenciales, las cuales ocasionan pérdidas en la producción agropecuaria. Cinco de ellas han implementado estrategias de adaptación, tales como modificar las fechas de siembra, utilizar plásticos para proteger los cultivos y emplear semillas resistentes a plagas y enfermedades. Sin embargo, sólo dos organizaciones han recibido capacitación específica en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático.

### ***Adaptación de la formulación de proyectos productivos sostenibles***

El reto principal para contextualizar la formulación de proyectos productivos sostenibles radica en integrar de manera efectiva elementos de diálogo social, resolución de conflictos, gestión del riesgo y adaptación al cambio climático dentro del proceso de educación no formal. En la experiencia de este trabajo, este objetivo se facilitó mediante la reflexión activa de las organizaciones rurales interesadas en la gestión de proyectos sostenibles. Inicialmente, durante el diagnóstico y la concepción de las ideas de proyecto, se identificó el interés y relevancia que las organizaciones concedían a estos ejes temáticos. A partir de ello, el equipo facilitador diseñó de manera colaborativa talleres orientados a explicar la importancia de cada tema y a promover actividades prácticas que facilitaran su comprensión. Finalmente, las organizaciones asumieron el compromiso de aplicar y replicar los conocimientos adquiridos en su interior, fortaleciendo así su capacidad para gestionar proyectos productivos con un enfoque sostenible y adaptado a sus realidades locales.

Por ejemplo, en todos los talleres realizados se han registrado los retos asociados al cambio climático a lo largo del desarrollo de la currícula de aprendizaje. Además, se facilitó un taller

específico para revisar los conceptos clave relacionados con el cambio y la variabilidad climática, durante el cual se resolvieron dudas y se exploraron formas de incorporar estos temas a la gestión de los proyectos productivos en formulación.

Los resultados de este taller permitieron identificar, en cada proyecto y organización rural, tanto los impactos del cambio climático sobre sus actividades como el potencial impacto que cada proyecto puede tener sobre el cambio climático. Esta información se está integrando en las diferentes etapas del ciclo de proyectos, mejorando inicialmente su caracterización como iniciativas sostenibles.

Asimismo, la inclusión de elementos de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático en los proyectos productivos puede, dependiendo de la línea de financiamiento del Inder que se utilice, traducirse en beneficios adicionales. En particular, la tasa de interés ofrecida por el Inder se reduce en un dos por ciento para aquellos proyectos que demuestren ser ambientalmente amigables, incentivando así la incorporación de prácticas sustentables en la formulación y ejecución de los proyectos.

**Figura 3.**  
**Taller de cambio climático en Santa Cecilia, La Cruz, Costa Rica.**



## Discusión y consideraciones finales

### *Gobernanza del desarrollo rural*

La evolución de la agenda global de desarrollo en Costa Rica se refleja en la Ley Inder y su normativa relacionada, la cual ha permitido finalmente contar con una definición oficial de desarrollo rural y con una estructura de gobernanza para su implementación. La creación de los 29 territorios rurales Inder, con el propósito de facilitar la identificación de factores geográficos y de identidad más homogéneos en el país, ha permitido también reconocer que los territorios rurales no solo desarrollan medios de vida agropecuarios. En el caso de Guanacaste, Costa Rica, cobran especial relevancia sectores como los servicios, el turismo, el desarrollo inmobiliario, el energético e incluso el industrial.

El territorio Liberia-La Cruz, donde se encuentra el distrito Santa Cecilia, enfrenta limitaciones importantes para contextualizar el desarrollo rural. Específicamente, la normativa actual permite efectivamente la gestión de proyectos de diversas índoles, desde obra pública, como electrificación, acueductos rurales y carreteras, hasta proyectos productivos agropecuarios. Sin embargo, no se observa una apropiación del concepto transfronterizo ni de sus implicaciones en estos procesos. Se han documentado pocas adecuaciones para favorecer la priorización de proyectos en zonas con indicadores de desarrollo limitados, como este territorio. Por ejemplo, durante los años 2023 y 2024 se estableció una directriz para dar prioridad a los cantones con un menor índice de desarrollo social, como La Cruz. En la práctica, esto no necesariamente implica que se implementen más proyectos, dado que los requisitos de formulación son técnicos y complejos, y no pueden ser cumplidos por organizaciones y personas sin experiencia.

### ***Capacidades organizacionales para el desarrollo rural***

Los resultados del diagnóstico de capacidades organizacionales para la gestión de proyectos productivos, en el contexto de la gobernanza territorial, evidencian significativas brechas en el capital humano que dificultan la adecuada gestión de dichos proyectos. Estas carencias abarcan desde el incumplimiento de requisitos legales y administrativos, hasta limitaciones técnicas y la ausencia de habilidades blandas esenciales para la formulación, ejecución y seguimiento de iniciativas financiables. Todos estos factores resultan críticos para cumplir con los estándares establecidos por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), especialmente en el caso de los proyectos territoriales, que demandan un alto nivel de capacidad organizativa. En consecuencia, la normativa vigente impulsa a que las familias agropecuarias no solo enfoquen sus esfuerzos en la producción y comercialización de sus productos, sino que también asuman un papel activo en el fortalecimiento y gestión de sus capacidades organizacionales, condición necesaria para acceder y gestionar recursos financieros destinados a su desarrollo.

El fortalecimiento de las capacidades organizacionales recae directamente en las propias organizaciones, lo que hace especialmente relevante su dotación de capital social, político y

financiero. Las limitaciones identificadas pueden ser superadas mediante diversas estrategias: i) contratando servicios de gestión por parte de profesionales competentes o aprovechando las habilidades y liderazgo interno dentro de la organización; ii) movilizándolo sus redes de apoyo o ejerciendo su influencia política para que universidades públicas, la Municipalidad de La Cruz e incluso organizaciones no gubernamentales se comprometan a aportar recursos destinados a la formulación de proyectos; y iii) participando activamente en procesos orientados a fortalecer sus capacidades organizacionales, con el fin de desarrollar la formulación de proyectos y gestionar sus iniciativas de manera autónoma.

Las tres opciones anteriores tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, la compra o el encargo de la formulación puede realizarse relativamente rápido y sin comprometer el tiempo de las organizaciones; sin embargo, no hay garantía de que la formulación se realice adecuadamente, ni de que la organización la comprenda y sea capaz de presentarla ante las instituciones y espacios de gobernanza que otorgarán el aval al proyecto. También se puede optar por el proceso de fortalecimiento de capacidades, el cual compromete recursos de las organizaciones y toma más tiempo, pero genera aprendizajes que permanecen en el territorio, fortaleciendo la base de recursos locales. ¿Qué opción es más eficiente y garantiza el buen uso de los recursos gestionados? ¿De qué manera se han gestionado los proyectos que han sido financiados por el Inder? Son preguntas que ayudarían a contar con información para guiar nuevos procesos de gestión y, probablemente, mejorar los criterios de selección de estos proyectos.

### ***Formulación de proyectos productivos resilientes***

La incorporación de los ejes priorizados en el proceso de educación no formal de esta experiencia es una innovación que se está evaluando. Hasta el momento, con la organización de dos talleres (resolución de conflictos y cambio climático), los representantes de las organizaciones han mostrado un gran aprendizaje y parecen incorporar estos conceptos tanto en los procesos de formulación como en el funcionamiento de sus organizaciones. Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo y no se logra el anhelado financiamiento, puede generarse una actitud de desinterés hacia el proceso de fortalecimiento de capacidades.

Por otro lado, las reglas para la gestión de proyectos ante el Inder han venido modificándose debido a señalamientos de los organismos de control y a la gestión del gobierno de turno. Esto genera cambios en los formularios y requisitos de los proyectos territoriales, los cuales requieren tiempo adicional para ser conocidos y cumplidos, lo que incrementa el tiempo de gestión de los recursos solicitados ante el Inder. Nuevamente, ello genera desinterés y dificulta el desarrollo rural deseado. La alternativa para mejorar el proceso de gestión de proyectos es disminuir la complejidad del proceso y sus requisitos, pero esto contraviene diversas leyes y políticas de gestión de los recursos públicos de Costa Rica.

## Referencias

- Adamowicz, M. (2020). Theoretical and practical rural development concepts. *Annals PAAAE*, XXII (3), pp. 9-19. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.308214>
- Alonzo, S., Sáenz-Segura, F., y Le Coq, J.-F. (2011). *Evolución y práctica de las políticas públicas ambientales y agrícolas en Costa Rica; Una revisión de 1910 al 2008*. ANR. IRD. CIRAD. CEMAGREF. [http://agritrop.cirad.fr/562530/1/document\\_562530.pdf](http://agritrop.cirad.fr/562530/1/document_562530.pdf)
- Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (2005). *Ley nacional de emergencias y prevención del riesgo* No. 8488. Disponible en: [http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=56178](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=56178)
- Baker, S. (2016). *Sustainable development*. Nueva York: Routledge.
- Balanzo, A., Garavito, L., Rojas, H., Sobotova, L., Pérez, O., Guaquetá, D., Mojica, A., Pavajeau, J., y Sanabria, S. (2020). Typical challenges of governance for sustainable regional development in globalized Latin America: A multidimensional literature review. *Sustainability*, 12 (7), 2702. <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/7/2702>
- Barboza Núñez, E. (2024). *Espejos distantes. Imaginación geográfica y migraciones en Guanacaste*. San José: Arlequín.
- Bautista-Solís, P. (2012). Are we learning? Strengthening local people's capacities to facilitate the recuperation of degraded pasture lands in Central America [Ph.D., CATIE. Bangor University]. <https://research.bangor.ac.uk/en/studentTheses/are-we-learning-strengthening-local-peoples-capacities-to-facilit>
- Bautista-Solís, P., Solís-Bastos, L., y Ramírez-Brenes, J. C. (2019). *Fortalecimiento de capacidades para la vinculación de pequeños y medianos productores ganaderos de Pozo de Agua y Puerto Humo, Nicoya en los procesos de gestión de recursos externos relacionados con las políticas nacionales de Desarrollo Territorial Rural (ForGeExt)*. San José: UNA.
- Bergeron, K., Abdi, S., DeCorby, K., Mensah, G., Rempel, B., y Manson, H. (2017). Theories, models and frameworks used in capacity building interventions relevant to public health: A systematic review. *BMC Public Health*, 17 (), 914. pp. 1-14. <http://doi.org/10.1186/s12889-017-4919-y>



- Díaz Bolaños, R. E., Arias Campos, L. D., y Madriz Sojo, G. (2023). Factores sociales, políticos y económicos en el desarrollo de una comunidad fronteriza: Santa Cecilia de La Cruz, Costa Rica (1900-2023). *Estudios*, 47, pp. 232-264. <https://doi.org/10.15517/re.voi47.58054>
- Castillo Corporán, F. (2011). Instrumentos para la educación basada en competencias. Centro La Escalera. Disponible en: [https://issuu.com/chabelacastillomontas/docs/instrumentos\\_para\\_la\\_educacion\\_basa](https://issuu.com/chabelacastillomontas/docs/instrumentos_para_la_educacion_basa)
- Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central, GT. (2011). Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo de Desastres. Disponible en: [https://www.cac.int/sites/default/files/Politica%20Centroamericana%20de%20Gestion%20Integral%20de%20Riesgo%20a%20Desastres%20\(PCGIR\).%20Regional.pdf](https://www.cac.int/sites/default/files/Politica%20Centroamericana%20de%20Gestion%20Integral%20de%20Riesgo%20a%20Desastres%20(PCGIR).%20Regional.pdf)
- Contraloría General de la República [CGR]. (2023). *Informe de auditoría acerca del modelo de gestión establecido por el Inder para el desarrollo de proyectos articulados con terceros*. CGR. Disponible en: [https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/09/SIGYD\\_D\\_2023014149.pdf](https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/09/SIGYD_D_2023014149.pdf)
- Ellis, F., y Biggs, S. (2001). Evolving themes in Rural Development 1950s-2000s. *Development Policy Review*, 19 (4), pp. 437-448. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-7679.00143>
- Esteva, G. (1997). *Development. The development dictionary: A guide to knowledge as power*. London: Zed Books.
- García, J. (2019). Índice de Progreso Social Cantonal 2019 [Web]. [1]. Costa Rica, INCAE. <https://www.incae.edu/es/clacds/proyectos/indice-de-progreso-social-cantonal-2019.html>
- Gutiérrez-Montes, I., Emery, M., y Fernandez-Baca, E. (2009). The Sustainable Livelihoods Approach and the Community Capitals Framework: The Importance of System-Level Approaches to Community Change Efforts. *Community Development*, 40 (2), pp. 106-113. <https://doi.org/10.1080/15575330903011785>
- Gutiérrez-Montes, I., y Bartol Hermida, P. (2017). *Comunidades de los ríos Banano y Bananito: Diagnóstico de sus medios de vida y capitales de la comunidad*. CATIE. MINAE. Fundación de Cuencas de Limón. <https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/8625>
- Hodge, I., y Midmore, P. (2008). Models of rural development and approaches to analysis evaluation and decision-making. *Économie rurale*, (307), pp. 23-38. <https://doi.org/https://doi.org/10.4000/economierurale.406>
- Instituto de Desarrollo Rural. (2014). *Caracterización del Territorio INDER Liberia-La Cruz Costa Rica*. INDER.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (s.f.). *Estadísticas demográficas. 2011 - 2025. Proyecciones nacionales. Población total*.
- International Labour Office. (2020). *Social dialogue and the future of work. Global Deal*. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed\\_dialogue/--dialogue/documents/publication/wcms\\_744465.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--ed_dialogue/--dialogue/documents/publication/wcms_744465.pdf) Intergovernmental
- Panel on Climate Change (2021). *Climate change 2021: The physical science basis. Contribution of working group I to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change*. Cambridge University Press. [https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC\\_AR6\\_WGI\\_Full\\_Report.pdf](https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf)
- Janvry, Alain de, y Sadoulet, E. (2003, 2000). *Nuevos enfoques del desarrollo rural en América Latina Encuentro de Altos Directivos sobre la Mitigación de la Pobreza Rural*. Santiago, CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/6545>

- Kay, C. (2001). Los paradigmas del desarrollo rural en América Latina El mundo rural en la era de la globalización : incertidumbres y potencialidades. X Coloquio de Geografía Rural de España de la Asociación de Geógrafos Españoles, Lleida, España. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=614581>
- Kron, S. (2010). La frontera norte tiene tres problemas: Tráfico de armas, de drogas y de migrantes». Migración irregular y discursos “securitarios” en Centroamérica: el caso de Costa Rica. *Encuentro*, 87, pp. 38-60. <https://doi.org/10.5377/encuentro.v42i87.247>
- Lu, Y., y de Vries, W. T. (2021). A bibliometric and visual analysis of rural development research. *Sustainability*, 13 (11), 6136. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su13116136>
- Luján Ferrer, M. (2010). La administración de la educación no formal aplicada a las organizaciones sociales: aproximaciones teórico-prácticas. *Educación*, 34 (1), pp. 101-118. <https://doi.org/https://doi.org/10.15517/revedu.v34i1.500>
- Ministerio de Agricultura y Ganadería. (s.f.). *Caracterización del área de influencia de la agencia de extensión agropecuaria*. <http://www.mag.go.cr/regiones/chorotega/CARACTERIZACION-AEA-LACRUZ.pdf>
- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2018). *Índice de desarrollo social 2017*. [https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/BXb\\_ILDDRwqVI\\_zHV3NadQ](https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/BXb_ILDDRwqVI_zHV3NadQ)
- Morales Barragán, F., y Jiménez López, F. (2018). *Fundamentos del enfoque territorial: actores, dimensiones, escalas espaciales y sus niveles*. México: UNAM. <http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Enfoque%20territorial.pdf>
- Morataya-Montenegro, R., y Bautista-Solís, P. (2020). Water Governance and Adaptation to Drought in Guanacaste, Costa Rica. En Vieira, E. de O., Sandoval-Solis, S., Pedrosa, V. de A., & Ortiz-Partida, J. P. (Eds.). (2019). *Integrated Water Resource Management: Cases from Africa, Asia, Australia, Latin America and USA*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-16565-9>
- Olivera, M., Córdoba, G., y Escobar Barquero, C. A. (2012). *Diagnóstico socio cultural y físico espacial de las comunidades ubicadas en el corredor fronterizo cantón de La Cruz, Guanacaste*. Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVIAH, CR). [https://www.mivah.go.cr/Documentos/investigaciones\\_diagnosticos/diagnosticos\\_planes\\_intervencion/2012/LA\\_CRUZ\\_GUANACASTE/DIAGNOSTICO\\_LA\\_CRUZ\\_FRONTERA.pdf](https://www.mivah.go.cr/Documentos/investigaciones_diagnosticos/diagnosticos_planes_intervencion/2012/LA_CRUZ_GUANACASTE/DIAGNOSTICO_LA_CRUZ_FRONTERA.pdf)
- Orozco-Mendoza, E. F. (2008). *Borderlands theory: Producing border epistemologies with Gloria Anzaldúa*. M.A., Virginia Polytechnic Institute and State University. <http://hdl.handle.net/10919/32268>
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (2020). *Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica* [Página web]. <https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal.html>
- Poder Ejecutivo. (2018). *Reglamento al artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo*, N° 8488, 176. (Costa Rica). [http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?para\\_m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87299&nValor3=113672&strTipM=TC](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?para_m1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87299&nValor3=113672&strTipM=TC)
- Poder Ejecutivo (2018). *Reglamento al artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo*, N° 8488, 176. (Costa Rica)

- [http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87299&nValor3=113672&strTipM=TC](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=87299&nValor3=113672&strTipM=TC)
- Poder Ejecutivo (2020). *Reglamento a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo*, 52. (Costa Rica).
- [http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm\\_texto\\_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62676&nValor3=124476&strTipM=TC](http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=62676&nValor3=124476&strTipM=TC)
- Quesada Chávez, M. J. (2019). Aportes a la educación no formal desde el abordaje de proyectos de acción social en la región Pacífico Central de Costa Rica. *Extensión en Red* (9). <https://doi.org/https://doi.org/10.24215/18529569e007>
- Ramírez Brenes, J. C., & Bautista Solís, P. (2022). Promoción de capacidades en organización comunal en territorios fronterizos: Caso de las comunidades vulnerables del cantón La Cruz, Guanacaste en la frontera Costa Rica-Nicaragua. En *Territorio y capacidades: Actores, redes e innovación* (La Paz, México).
- Samper, M., y Torrens, J. (2015). Políticas públicas para el desarrollo de los territorios rurales. Un recorrido por líneas locales: aportes para políticas públicas en el sector rural de Centroamérica, el Caribe y la Región Andina, San José, CR. <http://cdr.or.cr/libro/Cap1.pdf>
- Samper, M., & Torrens, J. (2015). Políticas públicas para el desarrollo de los territorios rurales. En *Un recorrido por líneas locales: Aportes para políticas públicas en el sector rural de Centroamérica, el Caribe y la Región Andina* (San José, Costa Rica). <http://cdr.or.cr/libro/Cap1.pdf>
- Sánchez Acuña, N., Jiménez Dalorzo, L., y Restrepo Salazar, M. E. (2015, 2015-06-01). UNA experiencia de desarrollo de habilidades y competencias estudiantiles para el fortalecimiento del trabajo en comunidades [desarrollo de habilidades, participación estudiantil, trabajo comunitario, prácticas estudiantiles, extensión universitaria]. 2015, 5(1), 14. <http://revistas.una.ac.cr/index.php/dialogo/article/view/7432/7671>
- Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. (2015). *Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial Costarricense (PEDRT)*. SEPSA. [http://www.sepsa.go.cr/PRODUCTOS/2016-APAR\\_PEDRT%202015-2030.pdf](http://www.sepsa.go.cr/PRODUCTOS/2016-APAR_PEDRT%202015-2030.pdf)
- Sistema Nacional de Información Territorial (2024). *Hojas topográficas 5000* [Dataset]. <http://www.snitcr.go.cr/Visor/index>
- Tapia Ladino, M. (2017). Las fronteras, la movilidad y lo transfronterizo: reflexiones para un debate. *Estudios fronterizos*, 18 (37), pp. 61-80. <https://doi.org/https://doi.org/10.21670/ref.2017.37.a04>
- Tribunal Supremo de Elecciones (2020). *Cómputo de votos y candidaturas: elecciones municipales 2020*. TSE. [https://tse.go.cr/pdf/elecciones/computovotos\\_febrero2020.pdf#page=578&zoom=100,0,0](https://tse.go.cr/pdf/elecciones/computovotos_febrero2020.pdf#page=578&zoom=100,0,0)
- Tribunal Supremo de Elecciones (2022). *Consolidado de resultados preliminares de la Elección Nacional 2022*. <https://www.tse.go.cr/2022/consolidado.html>
- Velásquez Uribe, Y. M., Quiceno Figueroa, E. M., y Tamayo-Agudelo, W. (2016). Construcción de planeaciones pedagógicas para la educación inclusiva. *Actualidades Investigativas en Educación*, 16 (3). <https://doi.org/10.15517/aie.v16i3.26113>

## Agradecimientos

Este trabajo fue desarrollado gracias al proyecto EduFrontera, una iniciativa de extensión universitaria financiada por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional de Costa Rica (subvención SIA 0063-22). PB y SL, además, agradecen el aporte de los proyectos: ForGeExt (0326-20), EcoSalud (SIA 0019-23), RC4 (SIA 0054-23), RC4-ForRisk (SIA 0033-25) e I3AC (SIA 0040-25). Los autores agradecen el apoyo incondicional de los habitantes de las poblaciones rurales del distrito Santa Cecilia; de la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Cecilia; de la ASADA de Santa Cecilia; del territorio Inder Liberia-La Cruz; de la oficina de Desarrollo Territorial del Inder; de los estudiantes asistentes del proyecto EduFrontera; y del gobierno local del cantón La Cruz, Guanacaste, Costa Rica. Este trabajo se llevó parcialmente a cabo gracias a las subvenciones concedidas por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), Ottawa, Canadá y el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) a los proyectos RC4 (66-CR, SIA 0054-23); e I3AC (32-CR, SIA 0040-25). Las opiniones aquí expresadas no representan necesariamente las del IDRC, CSUCA o las de la Junta de Gobernadores. Asimismo, este trabajo fue financiado por el Centro Internacional Fogarty de los Institutos Nacionales de Salud con la subvención: D43TW011403, titulada: “Programa Internacional de Formación en Salud Ambiental a lo largo de la Vida” (Claudio, L., y van Wendel de J.B., IPs), fondos asignados a la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai y a la Universidad Nacional de Costa Rica.

